



000009

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

*06 de octubre de 2010.
Ref. D - 02-mf-10*

*Licenciada
Ana Isabel Antillón
Directora Legislativa
Congreso de la República
Su Despacho*

Licenciada Antillón:

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Remito el Dictamen desfavorable de la Iniciativa de Ley identificada con el No. 4034 de Dirección Legislativa, que dispone aprobar Ley de Implementación de Jueces, Agentes Fiscales y Testigos sin Rostro, solicitándole se sirva efectuar los procedimientos respectivos.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo.

Deferentemente,

*Licenciada Nineth Montenegro
Presidenta*



*N.M/mf
c.c. Archivo*





000010



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE REFORMA AL SECTOR JUSTICIA

**INICIATIVA 4034. INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE
ACCIÓN DE JUECES, AGENTES FISCALES Y TESTIGOS SIN**

DICTAMEN

BLE PLENO:

El día once de agosto del año dos mil nueve, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia la iniciativa que dispone aprobar Ley de Implementación de Jueces, Agentes Fiscales y Testigos Sin Rostro, para su estudio y dictamen correspondiente. Dicha iniciativa se encuentra identificada con el Registro Número 4034 de Dirección Legislativa, y fue presentada por los Diputados Roberto Ricardo Villate Villatoro, Manuel Antonio Baldizón Méndez y compañeros.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:

Esta Comisión, al desarrollar el proceso de análisis de la iniciativa de ley en mención hace las siguientes consideraciones:

1. Contenido de la Iniciativa:

- 1.1. La iniciativa se compone de 8 artículos. Los últimos tres se refieren a la obligación de crear un reglamento, la derogatoria générica y la vigencia.
- 1.2. Se puede decir entonces que el contenido de las figuras que se pretenden regular se encuentra en los artículos 1 al 5 siendo estos:
 - 1.2.1. Artículo 1: Se faculta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que jueces y magistrados guarden su identidad por cualquier medio para no ser plenamente identificados con el fin de resguardar su vida e integridad personal.
 - 1.2.2. Artículo 2: Se faculta a la CSJ para que sea esta la que determine qué delitos son los "**comprendidos**" dentro de la ley.
 - 1.2.3. Artículo 3: Se hace referencia a un procedimiento, sin especificar claramente a qué procedimiento se refiere. Dicho procedimiento se aplicará a los agentes fiscales del Ministerio Público (MP) y a testigos que participen en procesos penales que indica esta ley.



000011



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

1.2.4. Artículo 4: Se hace referencia a los procesos penales a los cuales le será aplicable lo que se estatuye en la ley, siendo estos delitos de alto impacto:

1.2.4.a. Narcotráfico

1.2.4.b. Terrorismo

1.2.4.c. Crimen Organizado

1.2.5 Artículo 5: Tipifica un delito, al establecer que quién facilite la identificación de jueces, fiscales, magistrados o testigos en los procesos penales descritos en la ley será sancionado con cinco a ocho años de prisión incommutable y no se le podrá otorgar medida sustitutiva.

2. Sobre las opiniones solicitadas a instituciones:

2.1. En virtud de que la "justicia sin rostro" es una figura novedosa que no se contempla dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco se solicitó opinión a las siguientes instituciones estatales:

2.1.1. Corte Suprema de Justicia

2.1.2. Ministerio Público

2.1.3. Procurador de los Derechos Humanos

2.1.4. Procuraduría General de la Nación

2.1.5. Contraloría General de Cuentas

2.2. También se conocieron las opiniones vertidas por:

2.2.1. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

2.2.2. Fundación Myrna Mack

3. Sobre la figura de "Justicia Sin Rostro" en relación con la Constitución Política de la República de Guatemala:

3.1. Se hace necesario iniciar tomando como referencia para el análisis lo que la "Corte de Constitucionalidad ya ha dicho en relación a que para establecer la constitucionalidad de una ley o una norma, los tratados y convenios internacionales no son parámetro. Para el efecto se cita lo siguiente: **"... esta Corte asentó que los tratados y convenios internacionales -en cuya categoría se encuentran la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos- no son parámetro para establecer la constitucionalidad de una ley o una norma, pues si bien es cierto el artículo 46 de la Constitución le otorga preeminencia a esos cuerpos normativos sobre el derecho interno, lo único que hace es establecer que en la eventualidad de que una norma ordinaria de ese orden entre en**



000012



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

conflicto con una o varias normas contenidas en un tratado o convención internacional prevalecerían estas últimas; pero ello no significa, como se dijo, que las mismas puedan utilizarse como parámetro de constitucionalidad... (Gaceta No. 43, expediente No.131-95, página No. 47, sentencia: 12-03-97).

- 3.2. Una vez indicado lo anterior se debe iniciar el análisis de la Figura de "Justicia sin Rostro" analizando su armonía con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, para posteriormente compararlo con lo que establecen los tratados de derechos humanos al respecto, de forma separada.

3.3. **Debido proceso (Derecho de Defensa):**

La Constitución Política de la República de Guatemala, en adelante CPRG, establece en su artículo 12:

"Artículo 12.- Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente."

Este artículo ha sido interpretado y aplicado por la Corte de Constitucionalidad quien a su vez ha compilado doctrina y principios constitucionales que ha ido sentando con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad¹. Se hace necesario entonces estudiar la viabilidad jurídica de la figura de "Justicia Sin Rostro" a la luz de lo dicho por la Corte, que en referencia al este artículo se ha manifestado en la forma siguiente:

- "Tal garantía consiste en la observancia por parte del tribunal, de todas las normas relativas a la tramitación del juicio y el derecho de las partes de obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre que entraña el procedimiento judicial. **Implica la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano jurisdiccional competente para procurar la obtención de la justicia, y de realizar ante el mismo todos los actos legales encaminados a la defensa de sus derechos en juicio, debiendo ser oído y dársele oportunidad de hacer valer sus medios de defensa, en la forma y con las solemnidades prescritas en las leyes**

¹ Artículo 272, literal g) de la Constitución Política de la República de Guatemala.



000013



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

respectivas. Se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la persona de su derecho de accionar ante jueces competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos, de usar medios de impugnación contra las resoluciones judiciales, entonces se estará ante una violación de la garantía constitucional del debido proceso." Gaceta 26, expediente 366-92, página 151, sentencia 28-12-99 (el resaltado es propio).

- "...dicha norma 'se refiere a una garantía para la protección de los derechos individuales, en este caso una garantía judicial que se refiere al propio órgano jurisdiccional, el Juez natural o Juez legal. Consiste en la atribución de potestades para juzgar a aquel Juez o Tribunal predeterminados por la ley y que evita el funcionamiento del Juez ad hoc o ex post ipso y mucho menos, los tribunales secretos, proscritos terminantemente por la Constitución Política.'" Gaceta 60, expediente No. 107-01, página 752, sentencia: 02-05-01 (el resaltado es propio).

- 3.3.1. Las citas anteriores coinciden con la opinión vertida por el Ministerio Público en relación a este tema, la cual textualmente dice lo siguiente: "Si bien es cierto la iniciativa trata de combatir un problema complejo de seguridad para los funcionarios de justicia que intervengan en el proceso penal guatemalteco, la misma **vulnera normas concretas de la Constitución Política de la República de Guatemala y de Convenios Internacionales** de los que Guatemala es parte" (el resaltado es propio). Y más adelante hace referencia a que la posibilidad de tener jueces, fiscales y testigos sin rostro no es "congruente" con el artículo 12 de la CPRG que establece que **"ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos"**.
- 3.3.2. El Procurador de los Derechos Humanos se manifestó en la misma línea: "No obstante que el fin que persigue esta ley es encomiable, ya que tiende a la defensa de fiscales, testigos, jueces y magistrados que participan en los procesos penales mencionados, esta asesoría jurídica estima que esta normativa es inconveniente, ya que puede afectar garantías constitucionales referidas al Debido Proceso de las personas sometidas a tales procedimientos...".
- 3.3.3. Las anteriores opiniones coinciden con la de la Contraloría General de Cuentas, quien argumentó que el esfuerzo del proyecto es comprensible y loable, pero que: "...sin el afán de realizar un examen



000014



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

profundo del mismo, debe hacerse notar que en principio, colisiona con varias normas legales guatemaltecas, pretendiendo crear una jurisdicción excepcional, lo que no es viable (...). Y en referencia a este mismo punto dice "un Estado democrático, no puede crear un sistema normativo que colisione con su norma jurídica fundamental, ni puede basar un procedimiento que no respete la garantías del debido proceso, que como derecho humano ha sido incorporado a los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país".

3.3.4. Para hacer efectivo el debido proceso, se contemplan una serie de medios de defensa, para el efecto del análisis basta con citar uno como lo es la recusación de los jueces y agentes fiscales.

3.3.5. Para el efecto se puede citar nuevamente al Ministerio Público que opina: "...una de las garantías constitucionales fundamentales para el debido proceso, es la de ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial. **Esta garantía únicamente puede ser implementada si las partes procesales tienen la posibilidad de impugnar la parcialidad o dependencia del juez mediante los institutos legales establecidos, entre ellos, la recusación.** Sería imposible hacer uso de este instituto legal si las partes procesales, Tanto defensores como fiscales, desconocen la identidad del juez o jueces que intervendrán en el proceso..." (el resaltado es propio). Mientras que el Procurador de los Derechos Humanos coincide al decir: "No pueden presentarse recusaciones con contra de los jueces, al desconocer los sindicatos y sus defensores la identidad de éstos".

3.3.6. El derecho a recusar² a los jueces y agentes fiscales tiene por objeto preservar la imparcialidad e independencia del juzgador frente al juzgado. La recusación en el proceso penal está contemplada en el artículo 64 del Código Procesal Penal, decreto 51-92 del Congreso de la República, que establece: "**Recusación...** las partes o sus representantes, así como los defensores, podrán recusar a un juez cuando exista uno de los motivos indicados en la ley". La Ley del Organismo Judicial (LOJ) a que hace referencia, decreto 2-89 del Congreso, en el artículo 125 establece que son causas para recusar las mismas de los impedimentos y las excusas. Dentro de los impedimentos se encuentran por ejemplo: ser parte del asunto,

² Recusación: "Facultad que la ley concede a las partes en un juicio civil, penal o laboral, para reclamar que un juez, o uno o varios miembros de un tribunal colegiado, se aparten del conocimiento de un determinado asunto, por considerar que tienen interés en él o que lo han prejuzgado...", Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Datascan, S.A., 1ª. edición electrónica, Guatemala.



000015



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

haber sido juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto, tener parentesco con alguna de las partes, entre otras; mientras que para el caso de las excusas se contemplan supuestos como: tener amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, haber intervenido con anterioridad en el asunto del que resulta el litigio, cuando exista parentesco, entre otras. Y se faculta a quien se considere perjudicado a poder recusar al juez con el objeto de que cese de conocer sobre el asunto, para que de esa forma se asegure que su juicio va a ser objetivo, imparcial e independiente.

- 3.3.7. Para comprender de mejor manera que debe entenderse por independencia e imparcialidad, se puede citar al jurista César Barrientos, quien dice que la primera es: *"la condición objetiva que permite a los jueces y magistrados ejercer la función de juzgar sin presiones, amenazas, sugerencias e interferencias"*, mientras que la segunda consiste en: *"la cualidad subjetiva del juzgador que le permite conocer de un caso específico por la falta de vinculación con las partes y los intereses en juego. Pero el juez no es un sujeto procesal neutro, está del lado de la justicia y su tarea es alcanzarla en sus decisiones"*³.
- 3.3.8. Por lo que la implementación de una justicia en la cual los jueces y agentes fiscales no puedan ser reconocidos, implica que el procesado no podrá asegurarse que quien lo juzga o quien lo acusa tiene esas cualidades, con lo cual su derecho a defenderse se vería restringido. Tomando las palabras de la misma Corte de Constitucionalidad se estaría ante una violación de la garantía constitucional del debido proceso. Al respecto del segundo supuesto en donde el sujeto procesal es el agente fiscal el Código Procesal Penal, establece en el artículo 111: ***"Excusas y recusaciones. Los funcionarios del Ministerio Público deberán excusarse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos en la Ley del Organismo Judicial para los jueces, excepto los que no tengan incompatibilidad con sus funciones. Las excusas, impedimentos y recusaciones serán resueltas informalmente por el superior jerárquico, quien, si procede, designará el reemplazo inmediato del funcionario. Contra lo resuelto no cabe recurso alguno"***. Esta facultad que la ley otorga al acusado para defenderse de un juicio parcializado se le vedaría.

³ Figueroa Sarti, Raúl y Barrientos Pellecer, César, "Código Procesal Penal acordado y anotado con la jurisprudencia Constitucional (por Figueroa Sarti), Exposición de Motivos (por Barrientos Pellecer)", F&G editores, 10ª. edición, Guatemala, 2005, página XXXVIII.



000016



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

- 3.3.9. El juez natural (legal), imparcial e independiente⁴ constituye entonces una garantía para un juicio justo; si se le impide al procesado la posibilidad de controlar esa legalidad, imparcialidad e independencia a través de la institución de la recusación, entre otras, para efecto del procesado dicha garantía no puede exigirse y por ende no puede hablarse de un debido proceso y el respeto al derecho de defensa.
- 3.3.10. Al respecto del juez natural dice el Procurador de Derechos Humanos: *"Ampliando lo expuesto, estimamos que se estaría violando, entre otros, el derecho al juez natural, entendido éste como derecho fundamental de los sindicados a ser juzgados por un órgano jurisdiccional de la jurisdicción penal ordinaria, basado en los principios de igualdad, independencia y sometimiento a la ley, con lo que se estaría afectando asimismo el principio de igualdad como fundamento del derecho penal..."*.
- 3.3.11. En el artículo 12, anteriormente citado también se contempla una proscripción expresa a que puedan funcionar *tribunales especiales o secretos*. Para comprender el alcance de la misma se hace necesario entender el significado de lo que debe comprenderse por "secreto". El Diccionario de la Real Academia Española lo define como: *"Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta"*.
- 3.3.12. El artículo 1 de la iniciativa en análisis faculta a que jueces, lo mismo que agentes fiscales y testigos (art. 3 de la iniciativa), *"guarden su identidad"* a manera de que no puedan *"identificarlos plenamente"*, que dicho de otra forma se refiere a ocultar sus rostros y todos aquellos aspectos que contribuyan a que quien está siendo juzgado no pueda identificarlos. Esto además de dejar en estado de indefensión a estas personas frente la posibilidad que quién lo juzgue pueda actuar con arbitrariedad u obedezca a otros intereses que no sean los de una justicia imparcial e independiente, encuadra de forma taxativa en la proscripción que hizo el legislador constitucional. Este argumento se ve reforzado por la opinión del Procurador de Derechos Humanos quien dice: *"Al crear eventualmente la Corte Suprema de Justicia este tipo de tribunales, estaría creando de alguna forma tribunales de "fuero especial", que aunque no reúnan las mismas características de los que funcionaron anteriormente en el país con ese nombre... se estaría violando la ley, por su naturaleza"*.

⁴ Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 203: *"Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. ...La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca"*.



000017



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

3.3.13. En relación al resguardo de la identidad de los testigos, también atenta contra el debido proceso ya que el acusado no podrá refutar el testimonio a partir de las circunstancias personales del testigo, cuando existan motivos para dudar de su imparcialidad, y con ello se violenta el principio de contradicción que debe inspirar el proceso penal.

3.3.14. A raíz de lo anterior se puede concluir que la figura de "*justicia sin rostro*" que se dispone aprobar, claramente colisiona con el debido proceso y derecho de defensa contemplado en el artículo 12 constitucional y además encuadra en la proscripción expresa contemplada en el mismo artículo; lo cual hace que su incorporación al ordenamiento jurídico interno devenga inconstitucional y por ende legislar en ese sentido sería infructuoso, ya que es la misma Constitución Política de la República la que establece en el tercer párrafo del artículo 44 que: "*Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza*".

3.4. Publicidad de los actos:

La Constitución Política de la República en la parte conducente del artículo 14 establece que: "(...) *El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente, todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata.*"

3.4.1. El fin último de la publicidad de los actos, que inicialmente se refiere a los sujetos que son parte del proceso, debe extenderse a la sociedad en su conjunto. Esto lo recoge de mejor forma el jurista Barrientos quien sostiene: "*El debate es el método de búsqueda de la verdad, mediante un acto público de intensa oralidad moderado por jueces, consistente en la confrontación de posturas sobre hechos, normas, pruebas y valoraciones*"⁵.

3.4.2. Lo público, entendido como lo notorio, lo patente, manifiesto, visto o sabido por todos⁶, es por naturaleza contrario a lo secreto y oculto. En ese sentido y citando nuevamente al mismo jurista se puede decir que la publicidad de la justicia es: "*el instrumento idóneo republicano*

⁵ Loc. cit. Pág. LXXVII.

⁶ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Real Academia Española, España, 2010, www.rae.es, 4.oct.2010.



000018



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

para que la sociedad controle a la jurisdicción y ésta difunda los valores que fundan la convivencia social”⁷.

- 3.4.3. Es procedente citar nuevamente en este sentido al Procurador de los Derechos Humanos quien al respecto opina: “Además, haría nugatorio el derecho a un juez independiente e imparcial, al ser sometida la persona a estos tribunales, ya que ello conllevaría la presunción de culpabilidad del procesado y la correspondiente sanción penal, lo que de paso vulneraría otra garantía: la presunción de inocencia y publicidad del proceso”.
- 3.4.4. De lo anterior se puede concluir entonces que un juez sin rostro, además de encontrarse proscrito por la Constitución y atentar contra el debido proceso, también atenta contra el principio general de publicidad de los actos jurisdiccionales y el control efectivo que la sociedad puede hacer de la administración de justicia.

- 3.5. De forma general en las opiniones vertidas también se menciona que esta iniciativa podría vulnerar otras normas constitucionales como la presunción de inocencia (también regulada en a. 14 CPRG) y el derecho a la igualdad ante la ley (a. 4 CPRG), entre otros.
- 3.6. En todo caso, se hace necesario evidenciar que ya existe legislación relacionada con la **“protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal”**, la cual se identifica con el número de decreto 70-96 del Congreso de la República. Por lo que previo a legislar sobre una figura que podría vulnerar normas constitucionales, debería hacerse efectiva la ley anteriormente citada, o reformar esta, si es necesario.

4. Consideraciones sobre la figura de “Justicia Sin Rostro” en relación con Tratados de Derechos Humanos ratificados por Guatemala:

- 4.1. Derechos inherentes a la persona humana (44) y preeminencia del Derecho Internacional (46)

Los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República fijan los límites y alcances que en relación al ordenamiento jurídico nacional deben de tener los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos. En relación a ello ha resuelto la Corte de Constitucionalidad, además de la cita contenida en numeral 3.1, en el sentido siguiente:

“En primer término, el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el Derecho interno debe entenderse como su

⁷ Barrientos, op.cit. pág. LXXVII.



000019



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando, pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución...” Gaceta No. 18, exp. 280-90, pág. 99, sentencia: 19-10-90.

4.2. Tratados internacionales en materia de Derechos Humanos

4.2.1. Las instituciones que opinaron al respecto de la iniciativa son de la opinión que la iniciativa en comento vulnera tratados internacionales en materia de derechos humanos. Tanto el Ministerio Público, como el Procurador de los Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas y la Fundación Myrna Mack, opinan que puntualmente se vulneran los siguientes artículos:

- 4.2.1.a. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
Artículo 8 Garantías Judiciales. Numeral 1. La persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterior por la ley.
- 4.2.1.b. Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (PIDCP):
Artículo 14, numeral 1. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.
- 4.2.2. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala –OACNUDH–, cuyo mandato contempla observar e informar sobre la situación de los derechos humanos con el fin de asesorar y proveer asistencia técnica a las autoridades guatemaltecas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas, para promover y proteger los derechos humanos en Guatemala⁸, opinó sobre la iniciativa en mención, fortaleciendo los argumentos ya vertidos por las instituciones, lo siguiente: “En virtud de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala, **las instituciones de**

⁸ OACNUDH; “Comentarios generales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala sobre la Iniciativa de Ley Número 4034 sobre Implementación de Jueces, Agentes Fiscales y Testigos Sin Rostro”, Guatemala, 01.09.2010, pág. 1.



000026



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

justicia deben respetar el conjunto de derechos y salvaguardias que garantizan un juicio justo a la persona sujeta a un proceso penal en los términos previstos por el artículo 14 del PIDCP, entre otros tratados internacionales⁹ (el resaltado es propio).

4.2.3. Esta última también hizo referencia a que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano de vigilancia de este tratado, en reiteradas ocasiones ha recalcado que los principios esenciales del debido proceso, en tanto "principios fundamentales" del juicio imparcial, son de naturaleza inderogable y no podrán ser suspendidos bajo ningún concepto¹⁰.

4.2.4. De las coincidencias a las que hacen referencia las instituciones citadas, se puede concluir que la iniciativa en análisis también vulnera derechos humanos reconocidos por tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, y su aprobación por tanto significaría un retroceso en este sentido.

5. Experiencias de otros países con la figura de "Justicia Sin Rostro":

5.1. Para finalizar el análisis es válido citar la experiencia que se ha tenido en otros países con esta figura, para lo cual se pueden estudiar los casos de Colombia y Perú.

5.2. En el caso colombiano la Corte Constitucional de Colombia (sentencia C-392/00) resolvió declarar inconstitucional las normas relativas a jueces sin rostro en el año dos mil. Para ilustrar los argumentos vertidos por dicha Corte se citan fragmentos de dicho fallo:

"...Reserva de identidad de funcionarios y de testigos. Utilización de medios técnicos para preservarla.

- El artículo 12 autoriza la utilización de los mecanismos técnicos que se estimen eficaces para garantizar la protección y reserva de identidad de testigos y fiscales, que excepcionalmente hayan sido autorizados por la ley, en aquellos procesos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados.

- El art. 13 autoriza la reserva de identidad para los fiscales que tengan a su cargo "la etapa de investigación previa y la instrucción" de algunos de los delitos cuyo conocimiento la misma ley asigna para el juzgamiento a los

⁹ Ibid. Pág. 2.

¹⁰ Ibid. Pág. 2.



000021



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Jueces Penales del Circuito Especializados, reserva esta que requiere "previo concepto del ministerio público", cuando existan graves circunstancias que así lo justifiquen por poner en peligro la vida o la integridad personal de tales funcionarios.

- El artículo 17 de la misma ley autoriza la reserva de identidad de los testigos en los procesos de que conocen los jueces penales del circuito especializados, en cuyo caso ellos podrán colocar "la huella dactilar en su declaración, en lugar de su firma", previa evaluación del fiscal delegado de las circunstancias que lo justifiquen, mediante resolución motivada que habrá de expedirse por el Fiscal General de la Nación, con concepto previo del agente del ministerio público...

La Corte considera que las normas mencionadas son inconstitucionales, por las siguientes razones:

- En cuanto hace relación a la reserva de identidad de los funcionarios a quienes corresponde adelantar la labor de investigación o de juzgamiento se observa:

El artículo 29 de la Constitución Política establece como una de las garantías del debido proceso, que éste ha de ser público. Este principio, conforme a la doctrina universal, implica el conocimiento por las partes de cuál es la persona que actúa como funcionario del Estado para instruir y para fallar el proceso, así como cuáles son las actuaciones que se surten en éste, pues, de otra manera no podría hacerse efectivo el derecho a la imparcialidad de los funcionarios judiciales, ni podría tampoco ejercerse el de impugnar las providencias que se consideren contrarias a la ley.

Así, si se priva al sindicado del conocimiento de la identidad del funcionario a cuyo cargo se encuentra la instrucción o el juzgamiento, aún cuando existieran causales para recusarlo si no se declara impedido, el sindicado se vería impedido para plantear siquiera la recusación y, así, se expondría a que su causa fuera instruida por alguien que careciera de la indispensable condición de la imparcialidad que constituye una de las garantías mínimas a que se tiene derecho en un Estado Democrático, conquista esta que en la historia de la humanidad constituye pilar fundamental del debido proceso, no sólo para contener eventuales abusos en contra de los justiciables, sino, así mismo, para que la transparencia de las actuaciones de estos gane para las decisiones judiciales confiabilidad y respetabilidad en el marco social en que ellas se produzcan.

- En lo que concierne a la reserva de identidad de los testigos, se anota:



000022



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Es evidente que cuando se ignora la identidad de la persona que rinde una declaración en contra del sindicato se mengua de manera protuberante y ostensible la garantía constitucional del debido proceso público, en la medida en que se desconoce por completo el principio de publicidad y contradicción de la prueba, al imposibilitarse el ejercicio pleno del derecho a tachar al testigo, cuando existan motivos para dudar de su imparcialidad.

Podría aducirse en pro de la constitucionalidad de la institución cuestionada, que lo que en definitiva importa es lo que dice el testimonio, y no quién es el testigo; y, además, podría agregarse que conocida tal declaración, existirá la posibilidad de interrogación posterior al testigo sobre lo declarado.

Sin embargo, tal argumentación resulta un sofisma inaceptable a la luz de la Constitución y de principios elementales del derecho probatorio. En efecto, para radie es desconocido que las condiciones personales del testigo como órgano de la prueba, pueden ser también materia de debate en el ejercicio del derecho de contradicción, cual sucede por ejemplo, si el testigo ciego afirma haber visto algo, y se discute por el sindicato si aquél tiene un sentido de la vista normal, disminuido, o carece del mismo por completo; e igual podría predicarse de quien afirma haber oído siendo sordo; o igual sucedería cuando el testigo asevera haber visto y oído, con explicación sobre lo que oyó y lo que vio, con profunda convicción personal de que así en efecto ocurrió, asunto que podría ser objeto de discusión por el sindicato que intentara la demostración de que el declarante no faltó a la verdad, pero padece de alucinaciones visuales o auditivas, o de ambas, en razón de padecer una esquizofrenia. Del mismo modo, la relación personal del testigo con el sindicato, con las autoridades o con quienes eventualmente puedan resultar afectados o beneficiados con su declaración, puede ser objeto de confrontación y examen en la contradicción de la prueba. Además, el contacto directo de las partes con el testigo durante la recepción de la declaración de este, permite al procesado o a su apoderado la percepción inmediata de la reacción anímica del deponente ante las preguntas que se le formulan, lo cual puede resultar útil para ejercer el derecho de preguntar o contrapreguntar en ese preciso momento algo que permita examinar lo declarado para mayor precisión en relación con los hechos objeto de la investigación, oportunidad que, conforme a las psicología judicial puede ser imposible de repetir luego, lo que quiere decir que, si se ignora quién es el testigo y si el sindicato se encuentra ausente cuando aquél declara, de esta manera se vulnera también su derecho a la publicidad y a la contradicción de la prueba, parte fundamental del debido proceso judicial. Lo mismo puede predicarse de las especiales circunstancias de tiempo, de modo y de lugar de las que afirma el declarante existieron para

6



000023



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

percibir los hechos que narra en el proceso, las cuales pueden constituir una explicación verosímil y suficiente, o por el contrario pueden servir para descartar tal verosimilitud y, en consecuencia, la credibilidad del testigo...¹¹

- 5.3. Para ilustrar el caso de Perú se puede citar la resolución de 30 de enero de 2003 del Tribunal Constitucional, que en su parte conducente resolvió:

"En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que al ser condenado el recurrente por magistrados "sin rostro", se lesionó el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, toda vez que el actor no tenía la capacidad de poder conocer con certeza quiénes eran los que lo juzgaban y lo condenaban. El Tribunal Constitucional comparte, mutatis mutandis, el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual "la circunstancia de que los jueces intervinientes en delitos por traición a la patria sean "sin rostro", determina la imposibilidad para el procesado de conocer la identidad del juzgador y, por ende, valorar su competencia" (Caso Castillo Petruzzi, sentencia del 30 de mayo de 1999, párrafo 133)...¹²

- 5.4. Las resoluciones antes citadas, evidencian como en los países que implementaron esta figura, la misma, por su naturaleza de secretividad, ha quedado en desuso. Esto es refrendado por lo dicho por la OACNUDH: "... en el caso de Colombia, el Comité de Derechos Humanos insistió en 1997 "en que ese sistema judicial, que permite la existencia de jueces sin rostro y de testigos anónimos, no está en consonancia con el artículo 14 del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos]. Asimismo, en el caso de Perú, en 1996, el Comité, en relación a la existencia del sistema de "jueces sin rostro", "expresó su profunda preocupación por esta situación ya que esto desvirtúa el sistema judicial y llevaría nuevamente a la convicción de personas inocentes sin un debido proceso". Asimismo, el Comité indicó que este juicio por "jueces sin rostro", es un sistema "en que los acusados no saben quién es el juez que los está juzgando y se ve denegado el derecho a un juicio público, lo que constituye un serio impedimento, de derecho y de hecho, para que los acusados preparen su defensa y puedan comunicarse con sus abogados" e "instó en particular a que se suprima el sistema de "jueces sin rostro", y a que se restablezcan inmediatamente los juicios públicos de todos los acusados, incluidos los acusados de actividades relacionadas con el terrorismo". Luego en el año 2000,

¹¹ Corte Constitucional de Colombia, **Sentencia C-392/00**, fecha de consulta: 5.10.2010, <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-392-00.htm>

¹² Tribunal Constitucional de Perú, exp. No 2169-2002-HC/TC, fecha de consulta: 5.10.2010, <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/02169-2002-HC.html>



000024



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*


el Comité acogió con satisfacción la abolición de los tribunales "sin rostro", como había recomendado el Comité"¹³.

- 5.5. A raíz de lo anterior, se hace evidente que esta figura riñe con los tratados de derechos humanos y que en los países donde se ha implementado ha resultado que tarde o temprano los máximos tribunales en materia constitucional han revertido sus efectos.
- 5.6. En ese sentido se hace ver que, en el caso hipotético de que se aprobara una figura cuya naturaleza sea la de "guardar la identidad" de los operadores de justicia, o dicho de otra forma la de "justicia sin rostro", internacionalmente además de que el Estado de Guatemala sería duramente criticado, la eficacia de las sentencias que se dicten bajo el amparo de esta figura podrían ser impugnadas internacionalmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que finalmente podría revertir sus efectos por lo que estos no serían positivos y sólo significarían más desgaste en las instituciones de justicia del país.

CONCLUSION:

Por lo anteriormente expuesto, reiterando que se reconoce que el objetivo de resguardar la integridad de jueces, agentes fiscales y testigos para evitar intimidación o riesgos de su vida e integridad física es encomiable, en virtud de que la presente iniciativa de "Ley de Implementación de Jueces, Agentes Fiscales y Testigos Sin Rostro" a criterio de la Comisión riñe con principios, derechos y garantías que establece la Constitución Política de la República y en Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por Guatemala, la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia emite **DICTAMEN DESFAVORABLE**, para que sea el Honorable Pleno el que decida sobre el mismo.

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE REFORMA AL SECTOR JUSTICIA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL SEIS DE OCTÚBRE DE DOS MIL DIEZ.


Nineth Varencá Montero Cottom
Presidenta

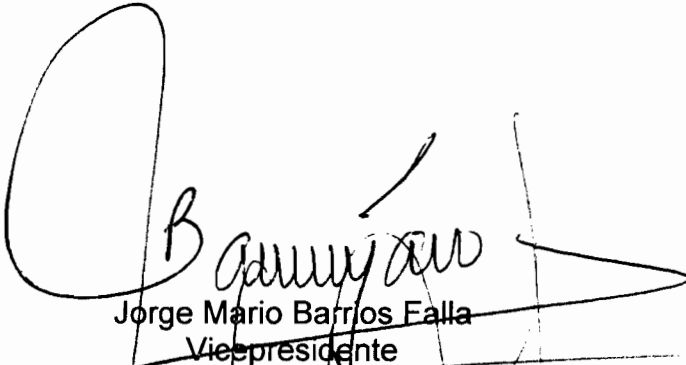


¹³ OACNUDH, op.cit. pág. 3.



000025

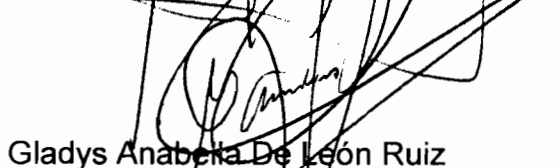
*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*


Jorge Mario Barrios Falla
Vicepresidente

Carlos Rafael Fión Morales
Secretario


Armando Enrique Sánchez Gómez

Rosa María Angel Madrid de Frade


Gladys Anabella De León Ruiz


Julio Recinos Castañeda


José Alberto Gándara Torrebiarte


Carlos Gerardo Gordillo Marroquín

Mario Roderico Mazariegos de León

Roberto Belarmino Méndez Urizar

Rubén Darío Morales Veliz

